

¿La historia interminable?

JOSÉ IGNACIO WERT

Se han cumplido 30 años de la muerte de Franco. En unos meses, se cumplirán 70 del comienzo de la Guerra Civil. Y, de no ser por los empeñosos empeños editoriales y la oficiosa oficialidad conmemorativa que una y otra efemérides suscitan, ambas pasarían desapercibidas para el común de los ciudadanos, lo que es la mejor noticia sobre la salud política básica de los españoles que cupiera imaginar.

Sin embargo, es sabido que las efemérides las carga el diablo. Y en este caso, las mismas se hilan con el propósito de forzar la consagración de una definitiva relectura de nuestra historia contemporánea no menos maniquea que la que impuso el franquismo mientras pudo. En un artículo de Javier Cercas en EL PAÍS del 29 de noviembre pasado (*Cómo acabar de una vez por todas con el franquismo*) creo que se resume adecuadamente el espíritu y la letra de esa relectura en la siguiente frase: "Había una vez en España una República democrática mejorable, como todas, contra la que un militar llamado Franco dio un golpe de Estado. Como algunos ciudadanos no aceptaron el golpe y decidieron defender el Estado de derecho, hubo una guerra de tres años. La ganó Franco, quien impuso un régimen sin libertades, injusto e ilegítimo, que fue una prolongación de la guerra por otros medios y duró 40 años". A esa lectura se apunta con entusiasmo la izquierda que nos gobierna.

A mi juicio, el problema que

suscita esta nueva *verdad oficial* no está en la demonización del franquismo, sino en la beatificación de la República. La descripción del régimen de Franco que despacha Cercas en las líneas anteriores es algo simplista y omite aspectos esenciales (como, por ejemplo, la propia evolución del franquismo), pero no puede decirse que sea falsa.

Sí es en cambio, a mi entender, radicalmente errónea la frase que describe a la República. La República no fue un régimen democrático mejorable como todos. Fue un fracaso de la democracia al que contribuyeron revolucionarios y contrarrevolucionarios en semejante medida. Lo fue, además, casi desde el principio, pero, sobre todo, lo fue en el período final, el inmediatamente antecedente a la Guerra Civil, como demuestran, a mi juicio de forma poco discutible, trabajos recientes de historiadores tan solventes como Stanley G. Payne.

Simplemente hagamos el ejercicio de transponer la historia de esos meses convulsos a la actualidad. Imaginemos que en el lapso de unos pocos meses se hubieran producido en torno a 300 muertes violentas en incidentes políticos, y entre ellas, la del jefe de la

oposición parlamentaria, a manos de agentes de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Alguien en sus cabales hablaría, en tal situación, de un "régimen democrático mejorable"?

La cuestión está en que un fracaso colectivo —como fue la República— no tiene por qué constituirse retrospectivamente en el mástil mora al que amarrar la nueva democracia. Esto es tan erróneo —y tan autodestructivo— como lo sería pretender que la legitimidad de la actual democracia que disfrutamos se ancla en las previsiones sucesorias del franquismo.

Pero eso, con ser malo, no sería lo peor. Lo peor es que el intento trae consigo una deslegitimación implícita de uno de los pocos procesos de nuestra historia contemporánea del que tenemos razones para sentirnos orgullosos o, al menos, satisfechos: la transición. El corolario de esa relectura es, efectivamente, que la transición no da lugar a una verdadera democracia, dado que los condicionamientos de la misma no permitieron hacer justicia a las víctimas del franquismo ni superar sus tabúes, y ello vicia las bases morales del nuevo régimen democrático.

Ése es el disparate. La transición española es casi un milagro histórico. Despreciar su valor como piedra angular de nuestra democracia es renunciar a una de nuestras mejores páginas de historia colectiva. Pero, sobre todo, es aventurarnos de nuevo en una senda de incertidumbre. La historia más reciente es pródiga en ejemplos de transiciones fallidas (sin ir más lejos, en los Balcanes o en algunos países del Este de Europa). Todas tienen en común un rasgo: en ellas, el deseo de vindicación de un pasado —por irreal, mitológico o fantasioso que éste sea— se hace más fuerte que la voluntad de construir un futuro. Esas transiciones fallidas han dado lugar a quiebras de los Estados —donde la falla histórica tenía un contenido étnico, como en los Balcanes—, a inestabilidad política, a fracaso económico y, lo peor, se han cobrado en ocasiones un costoso tributo en sangre.

Por eso, la cuestión no es académica ni teórica. Los asuntos del espacio público que ocupan el lugar central de la agenda política están refractados por ese prisma revisionista, y así nos va. Especialmente, el debate sobre el modelo territorial.

Parece que hubiera que revi-

sar la configuración del Estado de las Autonomías para ir a una filosofía más declaradamente federal porque el sistema actual no puede dar cauce a las aspiraciones de autogobierno de vascos y catalanes. Y todo ello porque las hipotecas de la transición impidieron un rediseño del Estado tan amplio como hubiera sido necesario.

Este argumento no se sostiene ni teórica ni históricamente. El nivel de autogobierno catalán y vasco en la República era inferior al que los propios Estatutos de Sau y de Gernika consagran. Ninguno de los dos tuvo tiempo de consolidarse y, además, ambos constituyeron, cada uno a su modo, fuentes de riesgo, amenaza y deslealtad para la República. No hay nada que mirar en ese espejo: felizmente, en casi nada nos parecemos.

A estas alturas, echar atrás la vista 70 años tiene mucho más sentido para evitar los errores del pasado que para buscar inspiración en futuros aciertos. Porque hoy ya no podemos dar por buenos los versos de Gil de Biedma ("De todas las historias de la Historia / sin duda la más triste es la de España / porque termina mal..."). Pero siempre corremos el riesgo de dejarnos llevar por estos otros de las *Glosas a Heráclito* de Ángel González: "Nada es lo mismo, nada / permanece. / Menos / la Historia y la morcilla de mi tierra / se hacen las dos con sangre, se repiten".

José Ignacio Wert es sociólogo.

Los hombres que dirigieron-dirigimos el PSOE y/o el Gobierno de la nación de 1975 a 1995, superamos ahora, con algunas excepciones, los sesenta años y por lo general no estamos en los círculos de dirección del partido ni del Gobierno encabezados ambos por José Luis Rodríguez Zapatero y por hombres y mujeres (ahora sí, entonces no las había en puestos de importancia) de una generación posterior. Otro elemento común a aquella generación es que, por lo que se lee y se oye a los que hablan y publican, es que es bastante crítica con lo que llamaríamos el segundo debate territorial; o, más claro, es extraordinariamente ácida con el Estatuto de Cataluña que el *Parlament* envió a las Cortes. Sin ser el que esto escribe en absoluto entusiasta del texto que Barcelona envió a las Cortes sino todo lo contrario, aún lo soy menos de una visión esencialista y sacralizada de España. Pero es que además creo percibir una cierta incompreensión generacional de los que mandaron con los que mandan ahora, una especie de retintín del supuesto viejo zorro frente al supuesto neófito. No debe ser ajeno a ello la exclusión demasiado brusca y extensa de todo el que tenía más de 55 años cuando Zapatero y su grupo ganaron el 35º congreso del PSOE. Creo que aquello, si fue una decisión sistemática, fue

Los sesentones del PSOE y la generación de Zapatero

LUIS YÁÑEZ-BARNUEVO

una equivocación y que todas las generaciones son importantes para sacar adelante un proyecto de país con probabilidades de éxito; pero responder con la misma moneda no es menor error y algo de ello percibo cuando observo la virulencia con que es criticado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE por algunos que, precisamente por haber ejercido responsabilidades importantes de gobierno, saben lo difícil que es manejar la cosa pública.

Es más, algunos de los críticos sesentones hacen valer su papel como constituyentes en 1978 para descalificar lo que ahora se está haciendo. Pues bien, quien esto escribe fue diputado constituyente y ve más sintonía en el espíritu que animan las actuales reformas estatutarias, y no sólo la de Cataluña, con el clima y el ambiente que animó la elaboración de la Constitución del 78, que lo que ahora dicen, con veinticinco años más, algunos de los protagonistas

de entonces. A finales de los setenta se tuvo que contar, como no podía ser de otra manera, con los elementos de la realidad social, política, económica de una España que recién salía de una larga dictadura y hoy, en cambio, tenemos a una España mucho más democrática, avanzada, próspera y progresista gracias en parte a esa generación de sesentones. La letra, pues, no puede ser la misma que en 1978.

No puedo creer que la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña, aprobado por el 90% del *Parlament* y con la simpatía de la mayoría de la población de aquella comunidad, sea el capricho de alguien (Maragall) o la imposición de otros (ERC), aunque podrían haber logrado el mismo o mayor apoyo en la sociedad catalana sin tanta verborrea identitaria y soberanista. ¿No es más razonable pensar que, al margen de su literalidad, responde a una necesidad de desarrollar la Constitu-

ción, 25 años después de ser aprobada? ¿Puede contemplarse como signo de normalidad que el texto que llegó de Barcelona sea debatido y negociado en las Cortes, donde reside la soberanía popular, y que todos aceptemos lo que la mayoría adopte y en su caso el Tribunal Constitucional no rechace? Por cierto que otra diferencia sustancial, que mis amigos y compañeros de tantas luchas no tienen en cuenta, es que la derecha centralista de ahora no es la de entonces. La UCD de Adolfo Suárez, después de unos comienzos titubeantes, llegó a comprender y compartir la realidad de una España plural y diversa, abandonado la "una, grande y libre" de sus orígenes. Hoy el PP, la derecha realmente existente, no sólo no quiere avanzar un milímetro sobre lo aprobado en 1978 sino que ha retrocedido a visiones preconstitucionales como aquella de "más vale una España roja que una España rota" y hace una

lectura estrecha y restrictiva de la Constitución, a la que se opusieron cuando eran Alianza Popular precisamente porque la consideraban muy progresista.

Es justamente el PP aznarista el más directo responsable de la efervescencia y crecimiento espectacular que han alcanzado los nacionalismos periféricos tanto en Cataluña como en el País Vasco. Sin el discurso y la política frentista que desde los Gobiernos de Aznar se emprendiera, sobre todo desde la mayoría absoluta del año 2000, descalificando todo lo catalanista o vasquista, situando al mismo nivel al PNV o a ERC que a la banda terrorista ETA (Mayor Oreja *dixit*)... el nacionalismo vasco o catalán no hubiera crecido ni se hubiera radicalizado como lo ha hecho. Me sorprende que algunos de los antiguos dirigentes socialistas no lo vean así, porque es un elemento esencial de la nueva realidad con la que tiene que lidiar el equipo de Zapatero y él mismo. Es lógico y esperable que el PP intente impedir el éxito de Zapatero con el *Estatut* o con la paz en el País Vasco, porque en ello se juegan sus intereses partidarios y electorales, pero algunos experimentados dirigentes socialistas de los ochenta no deberían caer en esa trampa.

Luis Yáñez-Barnuevo es diputado al Parlamento Europeo.

CARTAS

AL DIRECTOR

Viene de la *página anterior*

Lo que ocurre es que lo más fácil es plagar las carreteras de radares, así el Gobierno se queda tranquilo, el trabajo de los efectivos viales es llevadero y de paso

se recauda algo de calderilla para el Estado.— **Jaime Morales Lobo.** Madrid.

Voto inmigrante

El Parlamento Europeo rechazó el día 17 de enero el derecho al voto para los inmigrantes residentes de larga duración. El Gru-

po Popular Europeo sumó sus votos con los de la extrema derecha para que la Eurocámara deniegue un instrumento fundamental en la verdadera integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Porque la integración requiere participación y la participación conlleva necesariamente la implicación. Un inmigrante que trabaja y vive en un país du-

rante mucho tiempo y que no se sienta implicado difícilmente puede integrarse en una sociedad que le demanda esa integración mientras las legislaciones y algunas voluntades políticas se lo niegan.

Parece que la derecha europea no ha aprendido nada de los fracasos de los distintos modelos europeos de integración de

los inmigrantes y la de sus hijos. Según los antecedentes de esa derecha hacia la inmigración y los inmigrantes, me temo que su estrategia se basa más en la demagogia y la instrumentalización política del fenómeno para sacarle réditos recurriendo al miedo y al rechazo gratuitos.— **Mohammed Anouar Haidour.** Madrid.